

Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

El presente reclamo de ilegalidad, presentado por la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. (AFP UNO), cuestiona las Resoluciones N°226 de diciembre de 2023 y N°53 de febrero de 2024 emitidas por la Superintendencia de Pensiones, que impusieron una multa de 1.650 Unidades de Fomento por supuestas infracciones normativas. AFP UNO sostiene que ambas resoluciones adolecen de ilegalidad, principalmente porque no se configuraron las infracciones administrativas que fundamentaron la sanción.

Arguye que no existió infracción que amerite sanción, ya que los sobregiros atribuidos fueron consecuencia de acciones de terceros, fuera del control directo de la administradora. Se sostiene que la empresa actuó con diligencia para corregir los errores dentro de un plazo breve, sin perjuicio económico para los afiliados.

Señala que la sanción es desproporcionada, duplicando las multas impuestas históricamente por la Superintendencia en casos similares o más graves. Asimismo, se argumenta que no se ponderaron adecuadamente los criterios de intencionalidad, capacidad económica ni la colaboración prestada por AFP UNO durante el proceso.

Indica que se vulnera el principio non bis in ídem, al sancionarse separadamente infracciones derivadas de un mismo hecho, lo cual contraviene el principio de no ser sancionado dos veces por la misma causa.

En consecuencia, AFP UNO solicita que las resoluciones impugnadas sean declaradas ilegales y dejadas sin efecto. Alternativamente, se pide una rebaja significativa de las multas, de conformidad con los principios de proporcionalidad y equidad. Este recurso pone de manifiesto las posibles arbitrariedades en la aplicación de sanciones por parte de la autoridad reguladora, solicitando una revisión exhaustiva y fundamentada de los actos administrativos en cuestión.

Que comparece don Luis Felipe Hernán Bopp Espinoza, abogado, en representación de la Superintendencia de Fondos de Pensiones, solicitando el rechazo del reclamo de ilegalidad, con costas, presentado en su contra. Fundamenta su solicitud en que las alegaciones de la reclamante no difieren sustancialmente de los argumentos expuestos previamente en el recurso de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KJLUXQKLXFX

reposición administrativa, sin que se hayan aportado nuevos antecedentes que justifiquen el acoger la pretensión de ilegalidad que se intenta.

En primer lugar, señala que AFP Uno no cuestiona los hechos, la naturaleza de las infracciones ni la normativa aplicable contenida en la resolución sancionadora, sino que sus alegatos se centran principalmente en una distinta valoración de los criterios utilizados por la Superintendencia de Pensiones para determinar el monto específico de la multa.

Destaca que la Resolución N°226-2023, emitida por la Superintendencia, realiza una ponderación detallada y exhaustiva de los criterios orientadores para la fijación de la sanción, conforme a lo dispuesto en las páginas 35 a 39 de dicha resolución. En este sentido, la administración sancionada fue debidamente informada de las circunstancias que llevaron a la imposición de la multa, considerando las actuaciones de AFP Uno y su impacto en los Fondos de Pensiones.

En lo que respecta al primer cargo, argumenta que las obligaciones impuestas a las Administradoras de Fondos de Pensiones en relación con los sobregiros están claramente establecidas en el Libro IV, Título I, Letra D, Capítulo III, Número 2, Letra b, Numeral x del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Decreto Ley N°3.500, de 1980). Esta norma, afirma, es de carácter claro, preciso y obligatorio, prohibiendo expresamente el registro de sobregiros consolidados en las cuentas corrientes de un mismo fondo de pensiones.

Menciona que si bien la reclamante reconoce expresamente la existencia del sobregiro que fundamenta el cargo, intenta deslindar su responsabilidad en terceros, lo que, en opinión del representante de la Superintendencia, es jurídicamente improcedente. La normativa establece de manera inequívoca que las administradoras son plenamente responsables por las funciones, servicios o actividades que subcontraten. El legislador ha previsto, además, que este organismo carece de facultades para sancionar a terceros, por lo que impone a las AFP la responsabilidad directa sobre los actos de aquellos terceros que contraten.

En este orden de cosas, menciona que la reclamante intenta justificar su incumplimiento invocando una supuesta "realidad genérica del mercado", lo cual no la exime de cumplir con sus deberes fiduciarios. Destaca que en este sentido, la normativa es clara: la AFP no solo debe procurar la mejor



rentabilidad de los fondos que administra, sino también asegurar su seguridad. Esta responsabilidad incluye el deber de establecer los controles necesarios para evitar infracciones graves como el sobregiro consolidado de las cuentas corrientes de un mismo fondo.

Respecto al segundo cargo, relativo a la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés, subraya que este compromiso es ineludible para con los afiliados y forma parte del mandato de administración conferido por ley a las AFP. La confianza de los afiliados en la correcta administración de sus fondos se fundamenta, en parte, en el estricto cumplimiento de esta política.

Recalca que, tras la revisión de los documentos presentados por reclamante, no se encontraron antecedentes que evidenciaran que el Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés hubiese aprobado expresamente los límites de riesgo de mercado y de liquidez. La normativa, agrega, no permite suponer que dichos límites se consideran aprobados solo por no haberse solicitado su modificación. El monitoreo de las métricas de riesgo, según consta en las actas del comité, se limitó a revisar que dichas métricas estuvieran dentro de los límites vigentes, sin cuestionar la validez de esos límites o realizar un análisis adecuado conforme a los lineamientos del directorio.

Adicionalmente, menciona que la reclamante no acreditó haber realizado los cálculos de tracking error y beta respecto a instrumentos derivados, lo que incumple su propia política, tal como lo exige la normativa vigente.

En relación al tercer cargo, relacionado con la omisión en la información a la Superintendencia sobre los incumplimientos de la Política de Inversiones, argumenta que esta obligación de informar tiene como fin que la Superintendencia pueda monitorear cualquier anomalía en el sistema y verificar la subsanación de los problemas detectados, con el objetivo de proteger a los fondos de pensiones y sus afiliados. Destaca que la reclamante no cumplió con este deber de información, lo cual constituye una grave falta de diligencia en la administración de los fondos.

En cuanto a las alegaciones de la reclamante respecto a la supuesta desproporcionalidad de la sanción impuesta, señala que la multa de 1.650 UF fue fijada en atención a la capacidad económica de AFP Uno (representando



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KJLUXQKLXFX

solo el 0.0033% de su patrimonio), y tiene como objetivo generar un efecto disuasorio para que la administradora adopte las medidas de control necesarias y evite la reiteración de incumplimientos.

Destaca que la reclamante ya había sido sancionada previamente, el 20 de enero de 2022, por sobregiros consolidados, comprometiéndose entonces a realizar una serie de mejoras. Sin embargo, en menos de un año, el 12 de enero de 2023, incurrió nuevamente en la misma infracción, la cual se reiteró en abril de 2023, demostrando así una reincidencia que justifica plenamente la sanción impuesta.

Alega la vulneración del principio del non bis in ídem, aclara que los cargos N°2 y N°3 refieren a infracciones distintas y no a un mismo hecho sancionado dos veces. El segundo cargo se refiere a la omisión de cálculos de riesgo en instrumentos derivados y la falta de aprobación anual de los límites de riesgo de mercado y de liquidez, mientras que el tercero se refiere a la omisión en la notificación a la Superintendencia sobre estos incumplimientos.

Finalmente, solicita que se rechace el reclamo de ilegalidad presentado por AFP Uno S.A., con costas, considerando que la multa impuesta fue adecuada, proporcional y justificada conforme a los hechos y al derecho aplicable. Además, se solicita que se mantenga la resolución sancionadora en todos sus términos, considerando la reincidencia de la administradora y su incumplimiento de las normativas vigentes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente reclamo de ilegalidad, presentado por la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. (AFP UNO), se dirige contra las Resoluciones N°226 de diciembre de 2023 y N°53 de febrero de 2024, emitidas por la Superintendencia de Pensiones, que impusieron una multa de 1.650 Unidades de Fomento por infracciones normativas. AFP UNO sostiene que ambas resoluciones adolecen de ilegalidad, principalmente porque no se configuraron las infracciones administrativas que fundamentaron la sanción.

SEGUNDO: Que en síntesis las alegaciones de las partes son las siguientes: AFP UNO argumenta que los sobregiros ocurridos en las cuentas de los fondos de pensiones fueron causados por acciones de terceros, fuera de su control, y que actuó con la debida diligencia al corregir rápidamente



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KJLUXQKLXFX

dichos errores sin generar perjuicios económicos para los afiliados. Además, sostiene que la sanción impuesta es desproporcionada en comparación con otras multas aplicadas en casos similares y alega que se vulneró el principio de non bis in ídem, al ser sancionada por infracciones derivadas de un mismo hecho. Por lo tanto, solicita que las resoluciones sancionadoras sean declaradas ilegales y dejadas sin efecto, o que, en su defecto, se reduzca significativamente la multa.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, representada por don Luis Felipe Hernán Bopp Espinoza, solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad, argumentando que los planteamientos de AFP UNO ya fueron tratados y resueltos en el recurso de reposición administrativa, sin que se hayan aportado nuevos antecedentes que justifiquen modificar la sanción. La Superintendencia sostiene que AFP UNO no cuestiona los hechos ni la normativa aplicable, sino que discrepa sobre la valoración de los criterios usados para fijar la multa. Asimismo, subraya que las obligaciones sobre la gestión de sobregiros están claramente establecidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y que AFP UNO, como administradora, es responsable de prever y evitar estos incidentes, incluso cuando sean causados por terceros.

TERCERO: Que son hechos acreditados:

1. Existencia de sobregiros consolidados (Primer cargo): Está debidamente comprobado que el 12 de enero de 2023 se produjo un sobregiro en la cuenta del Fondo de Pensiones Tipo E por un monto de USD \$5.917,69, y que el 3 de abril del mismo año ocurrió otro en la cuenta del Fondo de Pensiones Tipo A por USD \$180.691. Estos sobregiros violan lo dispuesto en el Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que prohíbe expresamente tales operaciones en las cuentas corrientes de los fondos de pensiones. Aunque AFP UNO reconoce estos hechos, atribuye la responsabilidad a terceros. No obstante, la normativa es clara: las administradoras son plenamente responsables por las actividades que subcontraten, sin que sea relevante la intervención de terceros en la infracción.

2. Incumplimiento de la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés (Segundo cargo): Se ha acreditado que AFP UNO incumplió con la obligación de calcular de forma adecuada los límites de riesgo de mercado y



liquidez establecidos en su propia Política de Inversiones. Las actas del Comité de Inversiones revelan que su revisión se limitó a constatar que los valores de riesgo se mantenían dentro de los límites vigentes, sin realizar el análisis exhaustivo o la actualización que la normativa exige. Adicionalmente, no se llevaron a cabo los cálculos de tracking error y beta para los instrumentos derivados, lo que constituye un incumplimiento de las disposiciones normativas aplicables.

3. Omisión de notificación a la Superintendencia (Tercer cargo): Está demostrado que AFP UNO no informó a la Superintendencia de Pensiones sobre los incumplimientos relacionados con su Política de Inversiones, particularmente en lo relativo a la gestión de riesgos derivados y la falta de aprobación formal de los límites de riesgo. Esta omisión privó a la Superintendencia de la capacidad de monitorear y verificar adecuadamente la corrección de estas irregularidades, incumpliendo con el deber de notificación establecido para proteger los fondos de pensiones y a sus afiliados.

4. Responsabilidad objetiva de la administradora: Aunque AFP UNO ha alegado que los sobregiros fueron consecuencia de errores de contrapartes internacionales, fuera de su control, la normativa establece de manera inequívoca la responsabilidad objetiva de las administradoras sobre las actividades que subcontraten. Esta responsabilidad no puede ser delegada a terceros. Es deber de la administradora prever y evitar cualquier infracción de la normativa aplicable.

5. Corrección de los sobregiros: Si bien AFP UNO tomó medidas para corregir los sobregiros al día siguiente de su ocurrencia, logrando evitar perjuicios económicos a los afiliados, la pronta corrección no exime a la administradora de la obligación de cumplir estrictamente con la normativa. Los sobregiros consolidados están prohibidos, y la normativa no contempla excepciones por la corrección posterior del error.

6. Multa y reincidencia: La multa de 1.650 UF se impuso considerando que AFP UNO había sido previamente sancionada en enero de 2022 por hechos similares. A pesar de los compromisos asumidos para evitar futuras infracciones, reincidió en menos de un año en la misma conducta. Esta reincidencia justifica una sanción más severa, con el fin de disuadir incumplimientos futuros y promover el cumplimiento riguroso de las normas.



CUARTO: Que de conformidad con el artículo 18 del DFL N° 101 de 1980, las resoluciones sancionadoras del Superintendente deben ser fundadas y notificadas personalmente a la Administradora afectada, quien tiene derecho a recurrir ante la Corte de Apelaciones competente dentro de quince días desde la notificación. No obstante, para que el recurso de ilegalidad prospere conforme a dicho artículo, es esencial que el reclamo se sustente en una ilegalidad manifiesta, es decir, que la resolución sancionadora carezca de fundamentación suficiente o haya aplicado de manera errónea la normativa.

QUINTO: Que, de acuerdo con la misma norma particularizada para que este recurso prospere, debe demostrarse una ilegalidad manifiesta, lo que implica que la Resolución sancionadora carezca de fundamentación suficiente o aplique erróneamente la normativa vigente. En el presente caso, la Resolución N° 226 de diciembre de 2023 y la Resolución N° 53 de febrero de 2024, cumplen con los requisitos legales y están debidamente motivadas. La ponderación de los hechos y de la normativa aplicable se ha realizado de acuerdo con lo dispuesto en la legislación y jurisprudencia vigente, incluyendo los criterios de gravedad de la infracción, reincidencia y capacidad económica de la Administradora sancionada. Los tres cargos que fundamentan la sanción —la existencia de sobregiros consolidados, el incumplimiento en la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés, y la omisión de notificación a la Superintendencia— fueron debidamente acreditados, lo que justifica la imposición de la multa. En este sentido, la Corte Suprema ha establecido que las resoluciones administrativas deben ser claras y precisas en su motivación, criterio que se ha cumplido en este caso.

SEXTO: Que, por otra parte, el principio de proporcionalidad ha sido adecuadamente aplicado, ya que la multa impuesta de 1.650 UF, guarda relación con la gravedad de los tres cargos, los cuales revelan una falta significativa en el cumplimiento de las obligaciones legales de AFP UNO. En particular, la reincidencia en los sobregiros consolidados, la falta de evaluación y control de los riesgos financieros en instrumentos derivados, y la omisión en la notificación a la Superintendencia de los incumplimientos evidencian un comportamiento que amerita una sanción ejemplar. Si bien AFP UNO corrigió los sobregiros en el corto plazo, esto no la exime del cumplimiento estricto de la normativa, que prohíbe cualquier sobregiro



consolidado en las cuentas corrientes de los fondos de pensiones. La multa, además, representa un porcentaje mínimo del patrimonio de la Administradora (0.0033%), lo que refuerza su carácter disuasivo sin ser desproporcionado.

SÉPTIMO: Que, acreditada la existencia de tres infracciones distintas —todas relacionadas con aspectos esenciales en la gestión de los fondos de pensiones—, la Superintendencia ha ejercido adecuadamente sus facultades sancionadoras. En efecto, cada uno de los cargos refleja una vulneración de normas claves que buscan garantizar la transparencia y seguridad en la administración de los fondos; y la reincidencia en la conducta, refuerza la justificación de la sanción impuesta. La discrecionalidad del organismo regulador ha sido correctamente aplicada, dentro de los márgenes legales, y se ajusta a los principios del derecho administrativo.

OCTAVO: Que la Corte Suprema ha sostenido que el control judicial sobre las sanciones administrativas no puede reemplazar el criterio especializado del órgano regulador, tal como se ha señalado en el fallo Rol N°45.223-2019, reafirmando que las sanciones impuestas por la Superintendencia deben respetar el marco de discrecionalidad técnica, como en este caso, donde las infracciones se basan en hechos claros y en la normativa aplicable.

NOVENO: Que, en relación con el principio de non bis in ídem alegado por AFP UNO, este no ha sido vulnerado, ya que los tres cargos sancionados corresponden a hechos distintos. El primer cargo se refiere a la existencia de sobregiros consolidados; el segundo, a la falta de cálculos de riesgo en instrumentos derivados y la omisión de aprobación de los límites de riesgo; y el tercero, a la falta de notificación de estos incumplimientos a la Superintendencia. No existe, por lo tanto, una doble sanción por los mismos hechos.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, debe concluirse que no se cumplen los requisitos legales establecidos en el artículo 18 del DFL N°101, ya que no se ha acreditado la existencia de una ilegalidad manifiesta en las resoluciones impugnadas. Los tres cargos fueron correctamente ponderados y sancionados de acuerdo con la normativa vigente; por lo que el recurso de ilegalidad interpuesto por AFP UNO carece de fundamento suficiente y debe desestimarse.



Por estas consideraciones, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 del DFL 101, artículo 94 del DL 3500, **se rechaza** el reclamo de ilegalidad interpuesto por AFP UNO S.A. en contra de las Resoluciones N°226 de 2023 y N°53 de 2024 de la Superintendencia de Pensiones.

Redacción del Abogado Integrante Claudia Candiani Vidal.

Regístrese y comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Contencioso Administrativo 172-2024.

No firma la abogada integrante señora Candiani, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KJLUXQKLXFX

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Marisol Andrea Rojas M. Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KJLUXQKLXFX